

Medio: Provincia 23 – Río Grande	Fecha: 29-10-2010	Pág.:
----------------------------------	-------------------	-------

Pablo Márquez acepta el debate de políticos, con políticos

## Convenio chino: cada cual a su juego

El presidente de la junta departamental Río Grande del MPF, Pablo Márquez, aceptó la posibilidad de un debate en torno al convenio chino, pero entre políticos o entre técnicos. El desafío fue lanzado desde el oficialismo por los canales públicos, con la pretensión de que los referentes de oposición debatan con los técnicos del gobierno. Para Márquez, la discusión debe ser de políticos con políticos, o de técnicos con técnicos.



El presidente de la Junta Departamental Río Grande del MPF Pablo Márquez.

Río Grande.- “Yo estoy de acuerdo en que exista el debate entre la diputada (Liliana) Fadul o la diputada (Rosana) Bertone, como lo ha nombrado algún programa televisivo, pero que sea con el ambiente político”, señaló el presidente de la Junta Departamental del MPF Pablo Márquez.

“No estamos de acuerdo en que sea un debate con el personal técnico de la Secretaría de Hidrocarburos, porque consideramos que ahí tendrían que estar los técnicos nuestros discutiéndolo, para que puedan aclarar a la comunidad esto que no es tan fácil de entender”.

Según el mopofista con esta modalidad que fue sugerida “se quiere confundir, y de parte del gobierno lo han hecho varias veces. Uno ha trabajado directamente con los técnicos que han hecho diferentes informes y a veces cuesta mucho que la gente pueda entender bien los términos, a qué apuntamos cuando decimos que las reservas son menos, el tiempo de concesión, los precios. Creo que la discusión debería ser de los técnicos por un lado y de los políticos por el otro”, propuso.

Recordó que desde la Multipartidaria cuentan con el asesoramiento de José Chaile, del ingeniero Andino, “que bien podrían debatir con los técnicos del gobierno”, y cuestionó el último comunicado que envió Silvio Bocchicchio, a cargo del área de comunicación oficial, con varias respuestas a posibles preguntas que se formularía la población.

La nota formula preguntas que son armadas por el propio gobierno y las responde. Para Márquez, “confundió más de lo que aclaró. Hay que tener mucho cuidado cuando desde el gobierno quieren apuntar hacia los demás sectores diciendo que confundimos a la comunidad, porque solamente con basarnos en los dichos de cada funcionario desde el 2008 a la fecha, hay sobradas dudas, no por lo que uno opine sino por lo que ellos han dicho”, aseguró, tomando las contradicciones de los funcionarios.

Indicó que las deudas con las petroleras hasta ahora “no han aparecido”, los contratos se firmaron “sin participación”, e incluso “fuimos elegidos como veedores pero hasta ahora jamás nos han convocado por el tema de la renegociación de contratos petroleros”.

“Esto debería ser mucho más serio de parte de gobierno. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer: los informes técnicos que presentó cada partido político, y una presentación a la justicia porque es lo que corresponde. Lo he hecho de buena fe, convencido de que nos tenemos que involucrar más en los temas que tienen que ver con la provincia, porque así vamos a hacer que las cosas salgan mejor”, expresó.

Un poco de respeto

Por otra parte lamentó que desde el gobierno se deprecie la voluntad de la población al firmar un petitorio de consulta popular. “Escuché a algunos funcionarios que no dan valor a la firma de más de veinte mil personas porque consideran que no tienen conocimiento. Desde el gobierno dicen muchas cosas con tal de desvirtuar. Yo he presentado notas y jamás nos ha contestado; la gobernadora nos mintió en la cara a todos, porque nos dijo que nos olvidáramos de los chinos y que había cuatro empresas interesadas en industrializar el gas de Tierra del Fuego, cuando era un traje a medida para los chinos”, apuntó.

Cuestionó además que se hable de un “llamado a licitación internacional” que jamás existió, ya que no se trató de un proceso licitatorio sino una nueva modalidad que se incluyó en la ley de presupuesto.

“Cuando uno ve los puntos, son 600 millones de pesos de inversión, 45 días para presentar el estudio de impacto ambiental, y no sé por qué pusieron el precio de 1.80 (dólares el millón de BTU), y no lo dejamos librado a una oferta mejor. ¿Qué empresa se iba a presentar en 45 días, con dos años adelantado que se pedía, cuando es ilegal porque la ley nacional no lo permite? –se preguntó-. Queremos claridad y me parece

bien que se plantee un debate, pero que sea serio, y no como lo planteó en su momento el legislador del oficialismo (Manuel Rimbault), que ahora se vuelve atrás con la consulta popular”, fustigó.  
“La que está confundida en realidad es la comunidad, porque desde el lado del gobierno se ha confundido mucho y quizás del lado político se ha utilizado de mala manera. Lo importante no es lo que se dice sino lo que se firma, y nosotros tenemos firmados varios informes”, finalizó Márquez.